

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO:

De la sentencia en alzada, se eliminan sus fundamentos decimocuarto y decimoquinto.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1°.- Que, en la especie, el hecho de que la relación entre la AFP y el afiliado se encuentre especialmente regulada por normas de orden público de carácter particular, con espíritu y sentido propios, es la razón fundamental para que no resulte aplicable la ley 19.496 de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 2 bis de dicho cuerpo legal.

2°.- Que sobre este punto y antes que todo, se debe prevenir que no es relevante que muchas de las obligaciones de las AFP sean de naturaleza legal, ni que tampoco parece jurídicamente cierto que la existencia de tales obligaciones legales entre tales sociedades y sus afiliados se oponga a que la relación jurídica de estos pueda tener el carácter de convencional. En efecto, la existencia de obligaciones legales entre las partes de un contrato -en virtud de normas que puedan tener el carácter de orden público o no-, es un fenómeno de ocurrencia habitual, tanto en la legislación común como en la legislación especial; pues, normalmente los contratos están regulados por normas de orden público, indisponibles para las partes, o por otras de carácter dispositivo, cuyo contenido se añade supletoriamente al que proviene directamente del acuerdo, sin que ello desnaturalice la substancia contractual de la relación entre las partes. Baste con pensar, en lo referente a la legislación común, en las cosas de la esencia y de la naturaleza del contrato (artículo 1444 del Código Civil), como en el caso del interés máximo convencional (artículo 2206) o las obligaciones de saneamiento (artículo 1837), y en especial en las disposiciones de orden público, y por ende indisponibles para las partes, de los artículos 1545 y 1546, que establecen contenidos que, siendo eminentemente legales, no solo no cambian el carácter contractual de las relaciones jurídicas a que se aplican, sino que sin ellas el sistema de contratación no podría funcionar.

Lo mismo es posible visualizar en materia de leyes especiales, en que la cuestión puede ilustrarse con los deberes de información o de seguridad de carácter general que regula el artículo 3° inciso primero de la ley 19.496, o con las obligaciones de información especiales de las instituciones del ámbito



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TLPJXPPZDXQ

financiero que se establecen en los artículos 17 A, 17 B, 17 C y 17 D del mismo cuerpo normativo. La aplicación de ninguna de las obligaciones legales especiales aquí enumeradas permitiría concluir que la relación de consumo en esos casos no sería de naturaleza contractual, resultando indiferente para tal calificación la incorporación de dichas obligaciones legales a la relación entre las partes.

3°.- Que en esta línea argumentativa, debe relevarse que la falta de una negociación sustancial entre las partes y la protección dispensada por el legislador en tales casos a ciertos grupos sociales, es de hecho el supuesto inherente a las nuevas formas de contratación, que se caracterizan por el gran número de disposiciones de orden público que rigen la relación entre las partes, sin que por esto la matriz de la relación jurídica deje de considerarse de naturaleza contractual.

En lo que atañe a la ley 19.496, este cuerpo normativo trata justamente de ciertas formas contractuales en que la negociación está claramente disminuida o aparece como virtualmente inexistente para una parte, que por ello se denomina “débil”, la que por razones de protección social es ayudada por el legislador mediante técnicas de dirigismo contractual aplicadas en virtud de normas de orden público que determinan obligaciones para las partes, las cuales tienen por finalidad reequilibrar la posición de la consumidora frente a la proveedora, que constituye la parte sofisticada. Así, la existencia de un contrato y su regulación por normas legales es el supuesto fundamental de la protección del consumidor. Es más, la figura central de la relación de consumo en la ley 19.496 es el contrato de adhesión -predispuesto por el proveedor de forma inalterable para el consumidor-, que nuestro legislador adopta desde la teoría clásica de Saleilles (Primer Informe de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, 6 de noviembre de 1992, sesión 30, legislatura N° 325), para quien tales contratos “*se aproximan más a la Lex que al acuerdo de voluntades*”, pues son “*pretendidos contratos que de contratos no tienen más que el nombre*”, en los que, sin embargo, ni aun así la relación deja de tener la calificación de contractual. Es más, en este caso las disposiciones especiales o generales que rigen las estipulaciones del contrato de adhesión tienen tal particular fuerza, que el proveedor no puede alterarlas mediante las cláusulas del contrato, aun en el caso de las normas meramente dispositivas, sino sólo cuando ello aparezca



justificado por la finalidad del contrato en el caso concreto, como dispone el art. 16 letra g) de la ley 19.496. Por lo demás, la relación de consumo se extiende también a otras formas de contratación distintas del contrato de adhesión, cuya naturaleza convencional tampoco es dudosa. Efectivamente, solo se exige que el contrato sea de adhesión para la aplicación de las normas relativas a las cláusulas abusivas y otros tópicos del Título II Disposiciones Generales, del Párrafo IV Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión -las cuales aquí no han sido invocadas-, pero en las demás materias para la aplicación de la ley 19.496 no se exige esta forma específica de contratación, sino que basta la celebración de cualquier convención, siempre que lo sea por partes calificables como proveedor y consumidor. De forma que en estas otras áreas protegidas por el legislador, no solo no es dudoso el carácter contractual de la relación de consumo que supone la ley, sino que se introducen obligaciones legales (algunas de ellas con eficacia incluso desde la etapa precontractual), precisamente teniendo como condición necesaria la existencia de un contrato. [Patricio Carvajal R.: “El contrato de adhesión como ámbito de aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas en el derecho de consumo, en Las razones del derecho. Estudios en honor de José Joaquín Ugarte Godoy, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Thomson Reuters, Santiago 2022.]

4°.- Que conforme a lo dicho, la circunstancia de que en el caso sub lite el D.L. 3.500 califique la vinculación entre la AFP y el afiliado como una “relación jurídica”, nada prejuzga sobre la calificación de la fuente de la vinculación entre las partes y, por tanto, si desde tal perspectiva se trata de una relación contractual o no. En efecto, ese Decreto Ley señala en el artículo 2° inciso 1° *“El inicio de la labor del trabajador no afiliado genera la afiliación automática al Sistema y la obligación de cotizar en una Administradora Fondos de Pensiones, sin perjuicio de lo dispuesto para los afiliados voluntarios”*, agregando el inciso segundo *“La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización”*. Luego, ciertamente se verifica la existencia de una vinculación legal estable y permanente de los trabajadores, durante y después de su etapa laboral



activa, pero que en ningún caso excluye la presencia de relaciones contractuales del afiliado con su AFP. Ello se explica porque la vinculación permanente y única no es con la AFP sino que con “el Sistema” (de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia), como dice el propio inciso tercero [*“La afiliación al Sistema es única y permanente. Subsiste durante toda la vida del afiliado, ya sea que se mantenga o no en actividad, que ejerza una o varias actividades simultáneas o sucesivas, o que cambie de Institución dentro del Sistema”*]. Así, si bien dicha relación puramente legal es entre el trabajador y el “Sistema”, lo que ocurre entre el trabajador y las AFP, que este puede escoger y modificar libremente, es una contratación en que las partes se obligan a sí mismas al celebrar la afiliación de forma voluntaria. Precisamente el “Sistema” impone al trabajador el deber de afiliarse, es decir contratar, con alguna cualquiera de las instituciones denominadas AFP, y esa relación voluntaria -por voluntad expresa, o por voluntad tácita si nada dice quien, debiendo, omite tal afiliación al inicio de su labor- consiste en su forma más básica en un depósito irregular de dinero para el ahorro individual, de titularidad del afiliado, quien puede exigir sus obligaciones a la AFP conforme se establece en la ley que la regula. Se tratan estos de aquellos contratos denominados en doctrina como “forzosos”: del tipo “ortodoxo”, cuando elige el propio trabajador entre el universo de AFP del Sistema; y del tipo “heterodoxo”, cuando el legislador le asigna una AFP por falta de selección expresa al incorporarse a la fuerza laboral. En fin, tampoco en este caso resulta dudosa la calificación de convencional respecto de la fuente de las obligaciones entre la AFP y el afiliado.

5°.- Que, en consecuencia, la razón por la que no se puede aplicar la ley 19.496 en este caso se vincula exclusivamente, por un lado, al hecho de que la relación entre el trabajador y su AFP está completamente reglamentada en el D.L. 3.500, y por el otro, a que esta no constituye una relación de consumo. Por lo mismo, resulta irrelevante que la ley 19.496 pueda tratar obligaciones o aspectos particulares que aparentemente no se encuentren recogidos en esta ley especial (D.L. 3.500). Lo que da a este último cuerpo normativo una especialidad que no admite la aplicación subsidiaria de las normas sobre protección de los consumidores, es que todo el delicado funcionamiento orgánico del “Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia” que ha previsto en detalle el legislador, se vería interferido y desvirtuado por la



aplicación de normas que resultan ajenas a lo que se ha dispuesto para esta área de la seguridad social, bajo criterios de protección social completamente diferentes e inconexos con los que promueven la protección del consumidor.

6°.- Que lo dicho no se desvirtúa con lo preceptuado en la letra b) del artículo 2° bis de la citada ley 19.496, que estatuye *“No obstante lo prescrito en el artículo anterior, las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo: ... b) En lo relativo al procedimiento en las causas en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios, y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento”*, atendido que, en la línea de lo que se ha expuesto, la ley 19.496 establece un procedimiento colectivo y con fines indemnizatorios basados en criterios de protección social del todo ajenos a los delicados y específicos criterios de seguridad social que tiene en mente el legislador del D.L. 3.500; a lo que se suma que este mismo legislador ha previsto que las relaciones de derechos y obligaciones entre los trabajadores o diversos beneficiarios y sus AFP, queden reunidas en un conjunto constitutivo justamente de un *“sistema de afiliación”*, por lo que la interferencia de aquellas normas de consumo romperían la organicidad y unidad de tal sistema, y se verían desvirtuados los fundamentos de orden público y bien común que lo inspiran y que se orientan a la específica protección de la capitalización individual para la vejez de los trabajadores. Además, el espíritu del legislador al incorporar el artículo 2° bis de la ley 19.496, en virtud de la modificación operada por la ley 19.955, fue que *“el artículo 2° bis, igualmente nuevo, hace aplicable esta normativa de protección, en forma supletoria, a actividades productivas y comerciales reguladas por leyes especiales, en lo que no esté previsto en los respectivos cuerpos legales, y en lo relativo a procedimientos cuando esté comprometido el interés colectivo o difuso”* (Primer Informe de Comisión de Economía del Senado, 30 de junio de 2003, sesión 8, Legislatura N° 349, Boletín N° 2.787-03). Es decir, la aplicación supletoria de estas normas exige, como supuesto de hecho de las mismas, la existencia de una relación de consumo que cuente con una regulación particular; esto es, *“actividades productivas y comerciales”*, entre una parte calificable de proveedor y otra de consumidor. Sin embargo, el contrato del



trabajador y la AFP, la relación interna entre ellos (que es una cuestión distinta de la actividad de administración de los fondos), no es una relación productiva o comercial, de consumo, sino una relación de seguridad social, como se ha dicho; y el afiliado, acaso por lo mismo, tampoco se puede calificar de consumidor a la luz del artículo 1° N° 1 de la ley 19.496, pues, conforme las disposiciones del D.L. 3.500, de un lado no se trata exactamente de un destinatario final y, del otro, la naturaleza de sus “rentas” o “remuneraciones” desde las que se deduce la cotización no permiten tenerlo siempre y en todo caso por un no proveedor.

7°.- Que como corolario de lo expuesto, los achaques de deficiencias en el fallo sobre los aspectos probatorios resultan irrelevantes, desde que, según se expresó, la ley 19.496 es inaplicable a los conflictos que fundamentan la pretensión que se dedujo en estos autos, lo que imponía el rechazo de la demanda, como correctamente lo decidió el juez a quo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en las normas citadas y los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, dictada por el 4° Juzgado Civil de esta ciudad, en los autos caratulados “Conadecus con AFP Modelo S.A.”.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la ministra Lilian Leyton Varela.

Rol N° 8611-2024

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por la ministra señora Lilian Leyton Varela y la abogada integrante señora Soledad Krause Muñoz. No firma la abogada integrante señora Krause, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TLPJXPPZDXQ



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TLPJXPPZDXQ

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Lilian A. Leyton V. Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TLPJXPPZDXQ